

A pesar de todo... Flujo y reflujo de los movimientos populares peruanos

Denis Sulmont Sociólogo peruano. Profesor de la Universidad Católica del Perú. Autor de varias obras de su especialidad, destacándose entre otras: "El Desarrollo de la Clase Obrera en el Perú".

¿Cuáles son las características de las clases populares hoy en el Perú? ¿Qué han significado las intensas transformaciones y experiencias que han vivido en los últimos años? ¿Cuál es la dinámica de las luchas populares y su perspectiva como movimiento popular nacional en el contexto actual?

La situación de las clases populares, así como sus formas de organización y lucha varían en el tiempo, se combinan y entrecruzan. El análisis no puede limitarse a las grandes categorías abstractas del "movimiento campesino" (donde se coloca, generalmente, el resto de los pobres como en un cajón de sastre). Es necesario especificar los distintos tipos de relaciones de clases, los espacios sociales en los que se desenvuelven y las modalidades organizativas y de lucha que comparten, ubicando todo ello en el proceso de cambios sociales y acción política. Es en este sentido que trataremos de dar elementos de respuesta a las preguntas planteadas.

La presencia de los movimientos populares en la escena política nacional es un hecho notable en el Perú actual. Sus múltiples y variadas luchas se desarrollan con persistencia y convergen en una corriente popular que, si bien no constituye un bloque nacional cohesionado, se demarca nítidamente en las actuales estrategias políticas de las clases dominantes.

Sucediendo a las luchas campesinas y a la emergencia de un nuevo sindicalismo clasista en los años 50 y 60, los movimientos populares de los años 70 resistieron al control corporativo del Estado que intentó imponerle al gobierno militar en su primera fase y se alzaron masivamente contra las medidas fondo-monetaristas y los recortes de los derechos democráticos en la "segunda fase", constituyendo la más amplia movilización urbana, regional y nacional que las clases populares han protagonizado en su historia.

Frente a la radicalización de las luchas populares y la amplitud de la reivindicación democrática, la fuerza armada y los partidos de derecha concertaron una estrategia destinada a relegitimar el Estado frente a las mayorías, no sin previamente debilitar a las organizaciones populares más activas mediante un conjunto de medidas, como el despido masivo de dirigentes sindicales y la

institucionalización de la inestabilidad laboral. Esta estrategia, avalada por la administración estadounidense, tuvo relativo éxito en el Perú.

La transferencia del poder a los civiles desembocó en la victoria electoral de Belaúnde, favorecida por la crisis interna del APRA luego de la muerte de su líder en 1979, y la ruptura del recién constituido frente de izquierda. El nuevo gobierno, con una política liberal pragmática, capitaliza el movimiento anti-dictatorial y hace pasar una hábil campaña de promesa: un millón de empleos, amnistía político-laboral, control de precios, etc. Se inicia así en 1980 un régimen parlamentario asentado en la alianza Acción Popular Partido Popular Cristiano -, que impulsa una política de reprivatización y liberalismo económico y social, y apunta a centrifugar las fuerzas populares.

Las reivindicaciones postergadas, la permanencia de la crisis e inflación, el no cumplimiento de las promesas electorales y el envalentonamiento patronal y de la derecha, contribuyen a mantener muy alto el perfil de lucha de las clases populares. Al mismo tiempo, la recesión económica acentúa sus efectos desgastantes, en especial sobre el movimiento sindical, eje principal de la movilización popular en los años anteriores. No se trata de una coyuntura favorable a los éxitos reivindicativos y las luchas son más bien de resistencia.

Es en esta contradictoria situación que se multiplican los campos de lucha. El sindicalismo protagoniza su quinto paro nacional a principios de 1981 y mantiene un alto nivel huelguístico, sigue acompañado de marchas de sacrificio, ocupaciones locales, huelgas de hambre y otras manifestaciones. Junto a lo sindical, se movilizan las Comunidades Laborales, en defensa de su propia existencia. Las luchas campesinas culminan con el primer paro nacional agrario habido en el país a fines de 1982. En las ciudades de provincia, se levantan los Frentes de Defensa y se realizan paros regionales. Solidarizándose con las reivindicaciones populares e incidiendo sobre la lucha política nacional, se desarrollan novedosas experiencias en los medios de comunicación, la gestión parlamentaria y municipal.

Al calor de las elecciones municipales realizadas a fines de 1980 se constituye un frente de izquierda llamado Izquierda Unida que, con tropiezos, intenta coordinar los diferentes campos de lucha mencionados y articularlos en un movimiento de oposición al gobierno. Por su parte, el APRA, recomponiéndose de su crisis interna, trata también de encabezar la oposición apoyándose en las luchas populares. Paralelamente, en discrepancia con Izquierda Unida, el Partido Comunista "Sendero Luminoso" fracción maoísta asentada en el postergado departamento serrano de Ayacucho declara el inicio de la guerra popular desde el campo. Sus acciones armadas logran impacto y sirven al gobierno para aislar a la oposición y las luchas populares, centrando el eje de la contradicción política en torno al "terrorismo".

Siendo imposible tratar todas las situaciones populares que derivan de la trama de relaciones sociales, privilegiaremos algunos puntos de partida que nos parecen más relevantes: los movimientos populares en el campo, el movimiento sindical, las luchas urbanas y regionales y la perspectiva popular nacional.

Los movimientos populares en el campo

La reforma agraria de 1969 desplazó a la oligarquía terrateniente, trasladando las grandes haciendas a un sistema cooperativo. Junto a la reforma se levantó una nueva agremiación corporativa del campesinado, asentada en las organizaciones productivas de base y montando a partir de ellas Ligas, Federaciones y una Confederación Nacional Agraria, al margen de las organizaciones sindicales. Este sistema oficial de representación logró movilizar a una masa considerable del campesinado al calor de las adjudicaciones de tierra. Sin embargo, las reivindicaciones de los campesinos no beneficiados por la reforma, la presión por obtener créditos y mejores precios agrícolas y los conflictos con los funcionarios estatales, impulsaron nuevas movilizaciones clasistas en el campo, reactivando la Confederación Campesina del Perú y llevando las instituciones corporativas a antagonizarse con el propio Estado. El antagonismo se acentuó al cancelarse la reforma agraria en 1977 y al darse una nueva ola de invasión de tierra por parte de las comunidades, en detrimento de algunas empresas asociativas. Las contradicciones se desarrollaron no sólo en el Estado, sino también entre diversos sectores del campesinado.

Al iniciarse el nuevo régimen belaudista, algunos exdueños tratan de retomar posiciones, mientras que una capa de comerciantes y medianos propietarios, con mayor acceso al crédito, desarrollan un proceso de capitalización y modernización, amparados por una nueva Ley de Promoción y Desarrollo Agrario. En cambio, la situación económica de las empresas asociativas se deteriora y la mayoría del campesinado parcelario y comunero se mantiene en los niveles de mayor pobreza.

En suma, se da en el agro un proceso de diferenciación social que tiende a mantener rezagada a la masa campesina y hace emerger una burguesía rural. Esta cuenta con el apoyo del poder central, pero no logra sustituirse al anterior poder local gamonalista socavado por la reforma agraria y las luchas campesinas. Además, dicha burguesía se ve afectada por la política de bajos precios agrícolas, que el poder central impone para poder rebajar los salarios y contener las luchas populares en las ciudades, acentuando así el antagonismo campo-ciudad. Es así que la política agraria favorece la constitución de un vasto frente agrario para presionar al gobierno, como el Frente Unitario de Defensa del Agro Nacional creado en 1981 y el que dio lugar al paro nacional agrario de 1982, impulsado por las principales centrales campesinas del país. La plataforma de este paro incluye, además del problema de los precios, de la comercialización y del acceso al

crédito, la defensa de las cooperativas agrarias y otras reivindicaciones de tipo regional y social.

La poca participación del campesinado en las luchas populares urbanas y en particular los paros nacionales desde 1977, tiene que ver con el antagonismo campo-ciudad que alimenta la mencionada política de precios.

Por último, es necesario insistir en la situación rezagada de la mayoría del campesinado pobre. La migración hacia las ciudades sigue siendo la perspectiva del contingente principal de jóvenes de origen rural, pero, a diferencia de las décadas anteriores, las expectativas de promoción social para estos jóvenes en las ciudades resultan más rápidamente y claramente bloqueadas. En particular, la dramática carencia de oportunidad adecuada de trabajo para los egresados de las universidades de provincia, alimenta una profunda frustración y rebeldía contra el sistema imperante. A ello se añade la traumática confrontación cultural entre el mundo indígena serrano y el criollo occidental, que la juventud rural y migrante vive en carne propia, originando un conflicto interno agudo. Esta situación lleva a diversos comportamientos desesperados, entre los cuales se encuentra el fanatismo mitologizado que organizaciones como "Sendero Luminoso" han sabido recoger.

El movimiento sindical

El sindicalismo constituye la principal forma de organización de los trabajadores, atravesando prácticamente a todas las clases populares ya que abarca tanto a los asalariados del campo como de la ciudad, proletarios y sectores medios. Involucra en la actualidad alrededor de un millón de trabajadores, o sea, el 20% de la fuerza laboral.

Iniciado en la segunda década del siglo, el sindicalismo ha tenido una decisiva importancia en la historia del movimiento popular, siendo su eje principal en las zonas urbanas. Transitó de una incipiente orientación clasista, rápidamente reprimida en los años 30, hacia una dirección aprista afincada en la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), única central nacional entre 1944 y 1968. El cuestionamiento al sindicalismo libre propiciado por el APRA y la emergencia de nuevas corrientes clasistas llevó a la creación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), convertida hoy en la principal central nacional.

El proceso de constitución de la corriente clasista se afianzó en la lucha por su autonomía política frente al gobierno militar de la primera fase que intentó controlarlo, al calor del proceso de reforma de las empresas (en particular la creación de las Comunidades Laborales) y el reconocimiento sin precedentes de las organizaciones sindicales. La nueva central propiciada por el gobierno la Confederación de Trabajadores de la Revolución Peruana no tardó en

desmoronarse. Tampoco logró desarrollarse otra central de orientación socialcristiana denominada Confederación Nacional de Trabajadores.

La lucha sindical se constituyó en el eje articulador de las luchas populares urbanas que enfrentaron la crisis y la dictadura militar de la segunda fase, protagonizando los paros nacionales más importantes de la historia del país. Hoy día, pese a los despidos y al estrechamiento de las condiciones de su acción, el movimiento sindical continúa siendo la mayor fuerza popular de oposición a la política económica del régimen.

El movimiento sindical se desenvuelve desde hace diez años en una coyuntura de crisis. Ello significa una continua lucha por el reajuste de remuneraciones frente a la inflación y por la estabilidad laboral que abarca tanto la reposición de los dirigentes despedidos, como el impedir la reducción de personal y el cierre de los centros de trabajo.

La coyuntura de crisis significa a la vez el desgaste del movimiento sindical, la radicalización de sus luchas y su ampliación hacia otras formas de movilización popular. Actuando en una correlación de fuerzas desfavorable, las huelgas no obtienen resultados inmediatos y tienen que prolongarse y estar acompañadas de manifestaciones que impacten a la opinión pública, tales como las marchas de sacrificio, ocupación de centros de trabajo y de iglesias, huelgas de hambre y otros actos demostrativos donde participan mujeres y niños.

Por último, la coyuntura de crisis contribuye a la politización del movimiento sindical. Enfrentado sistemáticamente al problema recesivo, éste tiene que encarar no sólo la defensa de los intereses inmediatos de sus afiliados, sino la defensa de la industria nacional, de las empresas estatales y las modalidades de participación de los trabajadores en las empresas.

Pese a la complejidad de los problemas y la novedad de su tratamiento por las organizaciones sindicales, los trabajadores van participando en la discusión de programas alternativos, ampliando su conciencia de asalariado a la de productor. Este proceso aún embrionario constituye un elemento fundamental para el futuro político del movimiento popular.

Frente a lo anterior, la estrategia del gobierno que no puede ganar ideológicamente al movimiento sindical, combina una política de concertación social buscando mantener su imagen democrática, con una política de dispersión y desgastamiento. Junto con el mantenimiento de los dispositivos de inestabilidad laboral, esta política reduce la función tutora del Estado en las negociaciones colectivas y utiliza hábilmente la heterogeneidad estructural y las divisiones políticas del movimiento sindical. Las iniciativas del gobierno en el campo laboral fueron, sin embargo, seriamente recortadas por la presión del movimiento sindical que, luego de un año de negativa experiencia, rechazó la

concertación social y logró postergar la dación de nuevos dispositivos antilaborales con la Ley de Huelgas.

Internamente, el problema principal que afronta el movimiento sindical es, aparte de su crónica debilidad orgánica, el de su división. No solamente existen cuatro centrales, sino también un porcentaje considerable de organizaciones "independientes" que no están afiliadas a ninguna central (cerca del 40% de los sindicalizados), además de federaciones paralelas en importantes ramas. Si bien la izquierda tiene un papel promotor fundamental en el desarrollo de la corriente sindical clasista que hoy prevalece, también no llega a superar formas de sustitucionismo y dependencia en la relación partido-sindicato, dificultando la gesta de un amplio frente único.

Pese a estas dificultades, las organizaciones sindicales van dando pasos hacia una mayor capacidad de gestión propia en relación con los partidos políticos y hacia una mayor centralización. Las cuatro centrales lograron presentar al gobierno un pliego único y, junto con las federaciones independientes, impulsan algunas acciones de frente. También se da una coordinación entre el movimiento sindical y las luchas de las comunidades industriales, llegando a efectuarse, por primera vez, un "paro comunero" en 1982. Los sectores sindicalistas clasistas tratan de reagrupar sus fuerzas en torno a la CGTP e impulsar la constitución de una Central Unica. El APRA, por su lado, pretende cambiar la actual dirigencia de la CTP para adecuarla a su política de oposición al régimen.

Luchas urbanas y regionales

Según el censo de 1987, el 65 por ciento de la población vive en las ciudades. La tasa de crecimiento de la población urbana en las últimas décadas está alrededor de 4.4% anual, muy superior a la de la población total (3%). El número de ciudades de más de 100.000 habitantes que era tres en 1961, pasa de diez hoy día. En estas ciudades un tercio de la población vive en barriadas y otro tercio en tugurios y urbanizaciones populares.

La ciudad se ha convertido en el principal espacio social donde se desarrollan los movimientos populares. Es allí donde las clases populares tienen que asegurar su reproducción social, organizar su vida cotidiana y desenvolver sus luchas.

La mayoría de la población popular urbana es de origen serrano y cultiva su referencia cultural andina, al mismo tiempo que adopta el modo de vida urbano occidentalizado. Las jóvenes generaciones populares que crecen en las grandes ciudades, toman una mayor distancia frente a lo andino, desarrollando un tipo de identidad cultural "criollo-popular".

Además de los sindicatos, los sectores populares urbanos cuentan con numerosos canales de acción organizada, de base territorial y en torno al consumo y la vida

cultural: asociaciones de pobladores, juntas vecinales, cooperativas, clubes provinciales, centros deportivos y juveniles, clubes de madres, parroquias y comunidades cristianas, comités políticos, etc. La densidad organizativa de la población urbana ha ido aumentando en los últimos años.

La composición social heterogénea de las organizaciones populares ha favorecido su utilización al servicio de políticas clientelísticas y asistencialistas, desarrolladas tanto por el Estado como por numerosas entidades privadas nacionales e internacionales. También como respuesta a la ola de invasión de terrenos y a la organización de los pobladores de las barriadas para tener acceso a los servicios urbanos, el Estado inició una política de regulación de la presión popular urbana mediante una Ley de Barrios Marginales dada en 1961. El Partido Aprista, por su lado, impulsó las asociaciones de pobladores, y posteriormente el Comité Episcopal de Lima implementó el modelo de "juntas vecinales" que fue retomado y ampliado por el Estado a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), creado por la junta militar en 1971.

El sistema de organización vecinal impulsado por el SINAMOS tuvo el efecto de centralizar las demandas en relación al Estado. Pero la capacidad de éste de responder a las reivindicaciones de los pobladores resultó muy limitada, generándose un conflicto entre las organizaciones de base y las instancias oficiales de intermediación con el Estado. La crisis desencadenó un proceso de autonomización de los movimientos barriales, desbordando las políticas de control estatal y adoptando líneas de acción afines a las corrientes clasistas que animan gran parte del movimiento sindical.

Además de sus luchas por el agua, la luz, el transporte, etc., los pobladores se solidarizan con las luchas por el agua, la luz, el transporte, etc., los pobladores se solidarizan con las luchas sindicales, participan en los frentes de defensa regionales y se movilizan activamente en los paros nacionales y otras grandes huelgas como la de maestros. En este contexto se gesta una nueva conciencia política, desarrollada a través de las diferentes organizaciones de base, parroquias, bibliotecas populares, etc., mientras los partidos de izquierda adquieren una mayor presencia territorial (presencia que confirman los resultados electorales a partir de 1978). Asimismo, se desarrollan iniciativas de centralización de las organizaciones de barrio, a nivel distrital y departamental, dando lugar a la constitución de una Confederación General de Pobladores del Perú, en 1980.

La confluencia entre la lucha sindical y de los pobladores, junto con la movilización estudiantil, ha ido generando bruscas y espontáneas sublevaciones masivas provocadas por medidas gubernamentales antipopulares o una represión policial. Desde fines de los años 50 asistimos al estallido de este tipo de sublevaciones en las ciudades de provincia (por ejemplo, los "chimbotazos" de 1960 y 1973). En el curso de la última década, estas acciones se multiplican y alcanzan un mayor nivel de organización, dando paso a la constitución de los

"Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo". Con la crisis, las movilizaciones urbano-regionales se extienden aún más, siendo un elemento fundamental de la respuesta popular a los paquetes de medidas económicas, y de la realización de los paros nacionales. Los Frentes de Defensa involucran tanto a los gremios populares como a las instituciones de la burguesía local. No son organizaciones estables, sino instancias de coordinación que canalizan en forma coyuntural un amplio movimiento democrático, anticentralista, donde el peso principal es popular.

Las luchas populares actuales se ven afectadas por los cambios ocurridos en torno a las Municipalidades y las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. La nueva Ley de Municipalidades y otros dispositivos dados en 1978, pretenden cancelar los derechos especiales que existían en los barrios populares, integrando a estos barrios al sistema urbano en general y apuntando a individualizar la situación de los pobladores. Se trata de un importante cambio que hace girar la movilización popular urbana en torno al problema municipal.

Realizadas a fines de 1980, las elecciones municipales reflejan un desgaste del partido gobernante (del 45% de la votación en las elecciones presidenciales, baja al 33%). Los partidos reunidos en Izquierda Unidad alcanzan el 28% de los votos, superando por primera vez al APRA, y logran una presencia decisiva en los municipios de muchos distritos populares y algunas ciudades importantes, en especial Arequipa. Esta presencia, junto con la de alcaldes y concejales apristas y algunos oficialistas permeables a las presiones populares locales y afectados por los recortes de sus prerrogativas y presupuestos, convierte a numerosos municipios en canales de movilización popular, tanto para las reivindicaciones urbanas como las regionales. Este canal no sustituye a las organizaciones populares locales existentes, pero interactúa con ellas.

La relación entre municipios, partidos, gremios e instituciones, así como la participación directa de la población a través de los cabildos abiertos, han reactivado los Frente de Defensa e impulsado los paros regionales, que se sucedieron sin interrupción a lo largo del país, en especial el paro de todas las ciudades del norte en abril de 1982.

El constante impulso de las luchas regionales es estimulado por la implementación verticalista y centralista de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, así como la política económica del gobierno. Las plataformas de lucha regionales comprenden el pedido de asignación de mayores rentas para las corporaciones y los municipios por parte del gobierno central, la democratización de dichas instituciones, el financiamiento de las obras de infraestructura, la dación de un cánón original, la defensa de las empresas locales, el reajuste de los precios agrícolas y otras demandas de carácter laboral y urbano.

Las luchas regionales, además de dar lugar a importantes formas de expresión democrática de la población, como las Asambleas Populares y los cabildos,

contribuyen a proyectar las luchas populares hacia una perspectiva política amplia. Van constituyendo lo que podemos llamar "bloques populares regionales", cuya hegemonía es disputada entre sectores clasistas y la burguesía local. Los paros regionales tienen un carácter de "paros cívicos", es decir, han movilizado a la ciudadanía en general, con objetivos a la vez sociales y políticos.

La perspectiva popular nacional

Un país con diferencias sociales abismales, desgarrado entre Lima y provincias, entre las ciudades y las comunidades apartadas, una economía extravertida, en crisis crónica y subdesarrollada, que no cubre las necesidades y bloquea las expectativas... tal es el contexto que enfrentan las clases populares.

La expansión del capitalismo en el país introduce elementos desiguales de desarrollo e integración nacional: nuevos centros productivos, interrelaciones comerciales, medios de comunicación, concentración urbana, educación, etc. Pero, por su carácter periférico, imperialista y particularmente vulnerable en la crisis mundial, dicha expansión deja frustraciones. Tanto económica, como cultural y políticamente, el país sigue siendo un país a medias.

La burguesía peruana no parece tener otra opción que esta frustración nacional. El aprismo de los años 30, el belaundismo de los 60 y el velasquismo de los 70 fueron tres grandes intentos históricos de resolver el "problema nacional" renegociando dependencia con el capitalismo internacional y haciendo reformas con la participación subordinada de los sectores populares. Pero estos intentos abortaron. Hoy día, las opciones aparecen más nítidamente polarizadas entre dos campos: el transnacional, encabezado por una burguesía financiera e intermediaria, con su ideología neoliberal por un lado, y el popular nacional, asentado en las mayorías pauperizadas y proletarizadas, con su ideología democrática, por otro lado.

¿En qué medida el campo popular no se limita a ser el simple entrecruce de luchas populares disgregadas que puede regular hábilmente el neoliberalismo?
¿En qué medida este campo se constituye realmente en fuerza social y política?

La situación actual, con un régimen que reivindica para sí la apertura democrática, al mismo tiempo que impulsa una política económica transnacionalizada, con una oposición política entrampada en profundas contradicciones y con una desarticulación entre los movimientos políticos y sociales, no nos lleva a dar una apreciación triunfalista sobre la perspectiva popular nacional. Esta perspectiva es ante todo un "campo abierto" por la crisis de hegemonía de lo nacional-estatal que el régimen democrático-liberal actual no logra superar. La ocupación de este campo abierto por las clases populares es parcial y dispersa, pero se va dando en un proceso que mantiene continuidad y ha adquirido un carácter masivo. Consideramos que sí la perspectiva popular

nacional está acumulando fuerzas, a pesar de las contradicciones y limitaciones señaladas.

Los elementos principales de esta acumulación de fuerzas son:

a. El acercamiento de gran parte del campesinado y de los sectores medios a la situación del proletariado, compartiendo sus formas de lucha así como la identidad popular clasista.

b. El afianzamiento de una autonomía ideológica y política de clase en la acción de los gremios populares; el desarrollo de formas de solidaridad más amplia en apoyo a sus luchas y una mayor relación de estas luchas con el cuestionamiento de la política económica nacional.

c. La constitución de bloques populares regionales.

d. La presencia de un mayoritario movimiento intelectual identificado con las perspectivas nacionales y populares y su cristalización en medios de comunicación de masa, en particular los periódicos diarios de circulación nacional.

e. La experiencia acumulada de dirigentes gremiales y políticos ligados al campo popular en alternativas de gobierno empresarial, local y nacional a través de las cooperativas, comunidades laborales y empresas de propiedad social, la gestión municipal y el trabajo parlamentario.

f. El proceso unitario de un amplio sector de la izquierda.

Estos elementos tienen suficiente peso como para alimentar una acumulación de fuerzas en el campo popular, en una perspectiva nacional. La limitación principal es que estos elementos están aún bastante desarticulados entre sí. La dispersión, acentuada por el régimen político actual, es el mayor escollo para el movimiento popular peruano. Existen algunos ejes articuladores: el proletariado clasista, el movimiento regional, la lucha contra la política económica, la lucha por la defensa de los derechos democráticos... Pero estos ejes no tienen aún suficiente consistencia y coordinación como para poder cohesionar el conjunto popular. Esta falta de cohesión tiene su expresión a nivel de la cultura popular, de la conciencia política de los sectores organizados y de su dirección política.

Culturalmente, los sectores populares están sometidos a profundos conflictos que atraviesan su propia personalidad y resta consistencia a su conducta, como puede observarse en las típicas situaciones del "cholo" en el campo y del "criollo" en la ciudad. Lo popular criollo, por ejemplo, es una cierta afirmación de lo nacional frente a lo extranjero (lo gringo), pero también una toma de distancia con lo indígena, que tiene un sentido arribista. Asimismo, ser criollo es "no dejarse pisar el poncho", defender sus intereses con astucia. Lo criollo, que antes era

aristocrático, se ha democratizado, se ha convertido en popular. Pero mantiene aún un desfase entre el comportamiento y la situación real, un carácter de identidad cultural a medias. Este problema de identidad cultural genera constantes tensiones personales, que llevan a comportamientos anómicos y a veces desesperados. Estos comportamientos van desde el alto consumo de cerveza y el fanatismo futbolístico formas más populares de sublimar las tensiones hasta el "achorramiento" y violencia delincinencial exacerbada por las expectativas frustradas de ascensión social y consumo que genera la ciudad.

En relación a la conciencia política de los sectores populares organizados, debe recalarse que el proceso de politización de estos sectores está aún ligado a una experiencia de lucha gremial más que propiamente política. Además, la presencia de los partidos políticos en las luchas populares se ha dado sobre todo bajo la forma de círculos de dirigentes y asesores gremiales. Esta presencia mantiene una separación entre dirigentes y asesores por un lado y bases populares por otro lado, lo cual favorece una relación burocrática, instrumentalista y sectaria. Sin embargo, la experiencia de lucha gremial ha permitido la formación de numerosos cuadros populares y como hemos visto, tiende a abrirse más hacia una perspectiva política regional y nacional. El desarrollo de la capacitación y autoeducación popular que tiene un creciente dinamismo en los gremios en los últimos años, señala un cambio, aún embrionario pero decisivo, en el proceso de maduración de la conciencia política de las masas.

Por último, en lo que se refiere a la dirección política del movimiento popular, podemos hablar de una crisis de transición. Durante la década anterior, frente a un Partido Aprista comprometido con la derecha, emergió una izquierda atomizada y débil, pero que logró acompañar las principales luchas gremiales y afianzar la autonomía del movimiento popular frente al régimen militar. La crisis y la envergadura de la movilización popular rebasaron la capacidad de esta izquierda tanto para dirigir las luchas de masa, como para convertirse en alternativa política, pero ampliaron su radio de acción, impulsando una discusión programática y una reagrupación de fuerzas mediante la constitución de frentes políticos. Este proceso fue demasiado inicial y accidentado como para poder contrarrestar la estrategia de transferencia del poder concertada entre el gobierno militar y la derecha, pero permitió a la izquierda un nuevo y amplio espacio político (expresado en el 30% de votación que alcanzó en las elecciones para la Asamblea Constituyente en 1978). La crisis del APRA y la radicalización hacia la izquierda de sus bases populares contribuyeron también a la conquista de este espacio.

Sin embargo, iniciado el nuevo régimen belandista, y postergadas las expectativas de poder que había suscitado la coyuntura del auge popular y la crisis política, la izquierda sufre un doble-impacto: por un lado, muchos militantes se repliegan o dispersan, abandonando sus mitos revolucionarios y cayendo en el escepticismo; por otro lado, algunos sectores, encabezados por Sendero Luminoso, se aferran más bien a estos mitos, movilizandolos la violencia de

la juventud popular radicalizada. Interpelada por estas reacciones, la izquierda trata a la vez de mantener y profundizar su relación con las luchas populares, encabezar a partir de ellas la oposición al gobierno y constituirse en alternativa política nacional.